



REPUBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN
SALA QUINTA DE DECISION LABORAL

Proceso: Ordinario Laboral
Radicación: 05001-31-05-019-2017-00888-01
Demandante: Juan Carlos Cortes Herrera
Demandada: Colpensiones E.I.C.E.
Asunto: Consulta de sentencia
Procedencia: Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Medellín
M. Ponente: Sandra María Rojas Manrique
Temas: Pensión especial de vejez por alto riesgo

Medellín, noviembre veintisiete (27) de dos mil veintitrés (2023)

En la fecha anotada, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, integrada por los magistrados CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES, VICTOR HUGO ORJUELA GUERRERO y SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE como magistrada ponente, procede, conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, a impartir el grado jurisdiccional de consulta en favor de Colpensiones, respecto de la sentencia proferida el 17 de octubre de 2023 por el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Medellín, en el proceso ordinario laboral instaurado por el señor Juan Carlos Cortes Herrera contra Colpensiones E.I.C.E., conocido con el Radicado Único Nacional 05001-31-019-2017-00888-01.

1.- ANTECEDENTES

1.1.- DEMANDA

El señor Juan Carlos Cortes Herrera instauró demanda ordinaria laboral en contra de Colpensiones E.I.C.E., pretendiendo se declare que cumple con los requisitos legales para acceder a la pensión especial de vejez, establecidos en el artículo 3° del Decreto 2090 de 2003, como consecuencia de ello, se ordene a Colpensiones el reconocimiento y pago de la pensión de vejez por alto riesgo, desde el 1° de diciembre de 2015 y se condene al reconocimiento y pago de los intereses moratorios estipulados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

En respaldo de tales pedimentos, se expuso, que el señor Juan Carlos Cortes Herrera, nació el 2 de abril de 1967, que realizó aportes al extinto ISS equivalentes a 1328 semanas, en actividades de alto riesgo, dentro de minas de carbón y expuesto a altas temperaturas, cumpliendo con los presupuestos para acceder a la pensión especial de vejez, desde el 1° de marzo de 2011, y que el 28 de abril de 2017, solicitó el reconocimiento y pago de dicha prestación, sin obtener respuesta.

1.2.- CONTESTACIÓN

Al replicar la demanda, **Colpensiones E.I.C.E.**, refirió no constarle los supuestos fácticos narrados por el demandante, sosteniendo que corresponde al actor allegar los documentos que los acreditan, siendo una manifestación subjetiva de la parte actora la afirmación de que se reúnen los requisitos para acceder a la pensión.

En oposición a la prosperidad de las pretensiones formuló las excepciones de inexistencia de la obligación demandada y falta de derecho para pedir; buena fe; prescripción; innominada o genérica e imposibilidad de condena en costas.

1.3.- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Medellín, mediante fallo proferido el 17 de octubre de 2023, declaró que el señor Juan Carlos Cortes Herrera, es beneficiario de la pensión de vejez especial, a razón de trece mesadas anuales;

condenó a Colpensiones E.I.C.E. a reconocer y pagar al demandante la pensión especial de vejez por actividades de alto riesgo a partir de la fecha en que se acredite su retiro del sistema; declaró no probadas las excepciones y condenó en costas a la accionada.

1.5.- ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCIA

Dentro de la oportunidad procesal para presentar alegatos de conclusión se pronunció la apoderada de Colpensiones, para manifestar que la entidad no presenta objeción a las condenas, solicitando se estudie la sentencia en el grado de consulta, no se imponga condena en costas y se conserve la absolución de los intereses de mora.

2. CONSIDERACIONES

2.1.- COMPETENCIA DE LA SALA

Procede la consulta en favor de **Colpensiones E.I.C.E.**, en cumplimiento del mandato contenido en el artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social que dispone *“También serán consultadas las sentencias de primera instancia cuando fueren totalmente adversas a la Nación, al Departamento o al Municipio o a aquellas entidades descentralizadas en las que la Nación sea garante”*.

2.2.- HECHOS ESTABLECIDOS EN LA PRIMERA INSTANCIA

Los siguientes supuestos fácticos no son objeto de controversia:

- (i) Que el señor Juan Carlos Cortes Herrera nació el 2 de abril de 1967, tal y como se desprende de la copia del registro civil de nacimiento obrante a folio 28 del anexo 01 del expediente digital.
- (ii) Que el demandante solicitó a Colpensiones el 28 de abril de 2017 el reconocimiento de la pensión especial de vejez, según se desprende de la reclamación glosada a folios 31 a 34 del anexo 01 del expediente digital.

(iii) Que el pretensor ha cotizado un total de 1492.47 semanas en toda su vida laboral, conforme la historia laboral aportada por Colpensiones, actualizada al 07 de febrero de 2020, la cual milita a folios 141 a 155 del anexo 01 del expediente digital.

2.3.- PROBLEMAS JURIDICOS A RESOLVER

Debe determinar la Sala:

- ¿Si se encuentra ajustada a derecho la sentencia objeto de consulta proferida el 17 de octubre de 2023 por el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Medellín, determinando para tal fin, si el señor Juan Carlos Cortes Herrera, tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión especial de vejez por actividades de alto riesgo, y en caso afirmativo, la fecha a partir de la cual tiene derecho al disfrute de la prestación y si es procedente el reconocimiento de la indexación?

2.4.- TESIS DE LA SALA

Los problemas jurídicos planteados se resuelven bajo la tesis según la cual (i) el señor Juan Carlos Cortes Herrera, tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión especial de vejez por actividades de alto riesgo, (ii) estando supeditada la fecha de disfrute de la prestación al momento en el cual se acredite la desafiliación del sistema, (iii) siendo procedente el reconocimiento de la indexación, consecuentemente, la decisión de primer grado será **confirmada**, como se pasa a exponer:

2.5.- PREMISAS NORMATIVAS

La pensión de vejez especial para trabajadores que se desempeñen en actividades calificadas como de alto riesgo, fue prevista por el legislador teniendo en cuenta que estos oficios por su peligrosidad, en una prolongada ejecución, producen un desgaste orgánico prematuro y disminuyen la expectativa de vida, lo cual justifica

que estas personas puedan acceder a la pensión de vejez en una edad más temprana.

Señala el demandante que ha laborado en actividades de alto riesgo, específicamente como minero de socavón, actividad que se encuentra catalogada como de alto riesgo, conforme lo preceptuado en el numeral 1° del artículo 2° del Decreto 2090 del año 2003.

Respecto a esta actividad, los artículos 3° 4° y 6° del citado Decreto 2090 de 2003, establecen las condiciones y requisitos para acceder a la prestación:

“Artículo 3°. Pensiones Especiales de Vejez. Los afiliados al Régimen de Prima Media con prestación definida del Sistema General de Pensiones, que se dediquen en forma permanente al ejercicio de las actividades indicadas en el artículo anterior, durante el número de semanas que corresponda y efectúen la cotización especial durante por lo menos 700 semanas, sean estas continuas o discontinuas, tendrán derecho a la pensión especial de vejez, cuando reúnan los requisitos establecidos en el artículo siguiente.”

“Artículo 4°. Condiciones y requisitos para tener derecho a la pensión especial de vejez. La pensión especial de vejez se sujetará a los siguientes requisitos:

- 1. Haber cumplido 55 años de edad.*
- 2. Haber cotizado el número mínimo de semanas establecido para el Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, al que se refiere el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9° de la Ley 797 de 2003.*

La edad para el reconocimiento especial de vejez se disminuirá en un (1) año por cada (60) semanas de cotización especial, adicionales a las mínimas requeridas en el Sistema General de Pensiones, sin que dicha edad pueda ser inferior a cincuenta (50) años.”

“Artículo 6°. Régimen de transición. Quienes a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto hubieren cotizado cuando menos 500 semanas de cotización especial, tendrán derecho a que, una vez cumplido el número mínimo de semanas exigido por la Ley 797 de 2003 para acceder a la pensión, esta les sea reconocida en las mismas condiciones establecidas en las normas anteriores que regulaban las actividades de alto riesgo.

Parágrafo. Para poder ejercer los derechos que se establecen en el presente decreto cuando las personas se encuentren cubiertas por el régimen de transición, deberán cumplir en

adición a los requisitos especiales aquí señalados, los previstos por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 18 de la Ley 797 de 2003.”

2.6. CASO CONCRETO

En el asunto sometido a consideración de la Sala, el señor Juan Carlos Cortes Herrera, afirma que ha laborado en actividades catalogadas como de alto riesgo, como lo son la minería y la exposición a altas temperaturas, pues bien, en la historia laboral se relacionan como sus empleadores Industrial Hullera S.A., Mineros Unidos Ltda., Carbones Nechí Ltda., C.I Carminales S.A., Sociedad de Comercialización, Sparta Minerals S.A. y la Unidad Médica las Vegas, relevando que la parte actora no solicitó en la oportunidad procesal el decreto de prueba testimonial, desconociéndose si el señor Cortes Herrera, desempeñó labores de alto riesgo de manera continua en el marco de las diversas vinculaciones presentadas con las sociedades antes enunciadas.

Ahora, a fin de verificar si el gestor del proceso laboró en actividades de las catalogadas como de alto riesgo, el juzgado de conocimiento, en la audiencia realizada el 8 de julio de 2019, dispuso de manera oficiosa requerir a los empleadores relacionados en la historia laboral del accionante, a efectos de que certifiquen si las labores realizadas por el demandante en vigencia de las vinculaciones laborales, eran catalogadas como de alto riesgo, los tiempos en los que laboró y los cargos desempeñados, no obstante, no fue posible obtener toda la información, obrando únicamente certificación expedida por la Unidad Médica las Vegas aditada del 24 de septiembre de 2019, en la cual informa que el demandante labora allí desde el 26 de diciembre de 2016, en el cargo de auxiliar de mantenimiento, encontrándose afiliado a la ARL Sura, con riesgo III (folio 110 anexo 01), información que coincide con la certificada por la ARL Sura (folio 93 anexo 01) y se recibió certificación suscrita por el señor Adrián Osorio Lopera, en calidad de ex liquidador de Industrial Hullera S.A., (folio 130), la cual da cuenta que el pretensor ingresó a laborar a dicha sociedad el 15 de abril de 1991 hasta el 1º de junio de 1998, desempeñándose como minero desarrollando actividades de alto riesgo.

En igual sentido, la parte actora allegó certificación expedida por C.I. Carminales S.A., fechada del 6 de diciembre de 2016 (folio 76 anexo 01), en la cual se consignó que el demandante labora para la compañía desde el 23 de abril de 2010, en el cargo de electricista en el proyecto denominado Mina el Bloque, sin indicar la clase de riesgo, ni detallar las funciones realizadas.

De lo anterior, colige la Sala, que en principio el gestor del proceso solo acredita actividades de alto riesgo durante el periodo laborado para el empleador Industrial Hullera S.A., esto es, entre el 15 de abril de 1991 y el 1º de junio de 1998, tiempo equivalente a **366.42 semanas**, sin embargo, revisada la historia laboral obrante a folios 141 a155 del anexo 01, se tiene que el empleador solo efectuó cotizaciones con los puntos adicionales por 10 ciclos, es decir, por **42.9 semanas**, empero, teniendo en cuenta la certificación expedida por el ex liquidador de Industrial Hullera, en la cual se indicó que las funciones eran de alto riesgo, encuentra esta colegiatura procedente, tener en cuenta la totalidad de semanas laboradas por el señor Cortes Herrera para el empleador Industrial Hullera, como válidas para efectos de verificar el cumplimiento de los requisitos para acceder a la prestación deprecada, pues en primer lugar es claro que la omisión del empleador en su obligación de efectuar las cotizaciones con los puntos adicionales, no puede afectar al accionante, siendo diáfana la jurisprudencia del órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria laboral, en señalar que no puede ser el afiliado quien corra con las consecuencias negativas de las omisiones tanto del empleador en el pago, como de la administradora de pensiones, que no hizo uso de las acciones de cobro. (véase sentencias SL2070-2020, SL1225-2021 y SL 2173 de 2021), en segundo lugar, dicha relación laboral inició desde abril de 1991, recordando que, con anterioridad al 22 de junio de 1994, fecha de publicación del Decreto 1281, no se exigía el porcentaje adicional de cotización especial, así las cosas, se convalidaran las **366.42 semanas**, como semanas laboradas en actividad de alto riesgo.

Siguiendo el análisis de la historia laboral del accionante, se tiene que la misma da cuenta de algunas cotizaciones especiales que se realizaron en favor del

trabajador por parte del empleador Mineros Unidos S.A., entre octubre de 1998 y marzo de 2006, correspondientes a **85.8 semanas**, en igual sentido, el empleador Carbones Nechí Ltda., con quien se registran cotizaciones desde marzo de 2006 hasta el 15 abril de 2010, efectuó aportes con los puntos adicionales por 41 ciclos, equivalentes a **175.89 semana**, por su parte con el empleador C.I Carminales S.A., con quien se evidencia relación laboral entre el 21 de abril de 2010 a diciembre de 2012, efectuó las cotizaciones durante toda la vigencia de la relación laboral con los puntos adicionales, tiempos que representa **137.28 semanas**, asimismo, el empleador Sociedad de Comercialización, realizó los aportes con la cotización especial, por **132.99 semanas**, y finalmente, el empleador Sparta Minerals S.A., cotizó 2 periodos con los puntos adicionales, para **8.57 semanas**.

En resumen, encuentra la Sala que el gestor del proceso, acredita un total de **906.95 semanas cotizadas en actividades de alto riesgo**, precisándose que si bien dicha densidad de semanas resulta mayor a la obtenida por el a quo, que lo fue de **735.7**, ello obedece a que el Juzgado solo tuvo en cuenta los ciclos en los cuales la historia laboral reportaba la observación de “cotización de alto riesgo”, sin embargo, revisada la historia laboral por este juez plural ciclo a ciclo, se evidenció que existen otros periodos con observación de “*pago aplicado a periodo declararo*”, en los cuales también se realizó el aporte especial.

En la resolución del problema jurídico planteado, relieves la Sala que no hay discusión en cuanto a que la normatividad que está llamada a regir el derecho del demandante, corresponde al decreto 2090 de 2003, en tanto que el mismo no es beneficiario del régimen de transición estipulado en el artículo 6° del Decreto 2090 de 2003, pues al 28 de julio de 2003, no contaba con más de 500 semanas de cotización especial, acreditando solo **387.87 semanas**.

En el anterior contexto, se tiene que el señor Juan Carlos Cortes Herrera, nació el 02 de abril de 1967, cumpliendo los 55 años de edad, el mismo mes y día del año 2022, y respecto al número de semanas cotizadas, es claro que el accionante debe contar con el número mínimo establecido para el Sistema General de Seguridad

Social en Pensiones, que a partir del año 2015 es de 1300, densidad de semanas que supera con creces, en tanto que acreditó 1492.47 semanas cotizadas. Así las cosas, el accionante cuenta con **906.95** semanas con cotización especial por alto riesgo, superando en 206.95 semanas, las 700 semanas mínimas de cotización especial requeridas por el Decreto 2090 de 2003, igualmente excede en 192.47 semanas, las exigidas por el sistema general de seguridad social (1300), razón por la cual tendría derecho a que la edad para el reconocimiento de la pensión se disminuya en tres (3) años, sin embargo, toda vez el a quo determinó que la causación del derecho se da para el 2 de abril de 2022, cuando cumplió los 55 años y que el disfrute de la prestación lo será el momento en el cual se acredite la desafiliación del sistema, sin que dicho punto haya sido objeto de apelación por por la parte actora, se impone la confirmación de la providencia consultada.

La anterior situación no impide aclarar que tratándose de pensiones especiales de vejez, la Corte Suprema de Justicia, ha seguido el criterio general según el cual el disfrute está determinado por la fecha de desafiliación del sistema, que para el caso sería posterior al cumplimiento de los 55 años de edad, precisando que las reglas jurisprudenciales también imponen que cuando las cotizaciones posteriores devienen de la negativa injustificada de la entidad de seguridad social al reconocimiento de la prestación, debe tenerse en cuenta la inducción en error para efectos del reconocimiento del retroactivo, teoría que no fue alegada ni probada por la activa en la presente causa.

En igual sentido, se puntualiza que en esa sede judicial no es posible entrar a liquidar la prestación, para proferir condena en concreto, teniendo en cuenta que se desconoce si el actor cesó en el pago de sus cotizaciones y no se cuenta en el expediente digital con historia laboral actualizada que permita efectuar dichos cálculos.

Finalmente, se advierte que la orden de indexación resulta ajustada a derecho, aplicable a las mesadas que se causen entre la fecha de desafiliación del sistema y el pago de la obligación, por cuanto la misma constituye un factor que compensa la pérdida del valor real de los dineros, corrigiendo así la depreciación de la

moneda, recordando que sobre este tema la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia SL359-2021, adoctrinó:

“En efecto, la indexación se erige como una garantía constitucional (art. 53 CP), que se materializa en el mantenimiento del poder adquisitivo constante de las pensiones, en relación con el índice de precios al consumidor certificado por el DANE. A su vez, el artículo 1626 del Código Civil preceptúa que «el pago efectivo es la prestación de lo que se debe», esto es, que la deuda debe cancelarse de manera total e íntegra a la luz de lo previsto en el artículo 1646 ibidem. [...].

Ahora, la indexación no implica el incremento del valor de los créditos pensionales, ya que su función consiste únicamente en evitar la pérdida del poder adquisitivo de la moneda y la consecuente reducción del patrimonio de quien accede a la administración de justicia, causada por el transcurso del tiempo. [...].

Sin costas en esta instancia.

3.- DECISION

En consonancia con lo expuesto, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

FALLA:


1.- Se **CONFIRMA** la sentencia proferida el 17 de octubre de 2023 por el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Medellín, en el proceso ordinario instaurado por el señor Juan Carlos Cortes Herrera contra Colpensiones E.I.C.E.

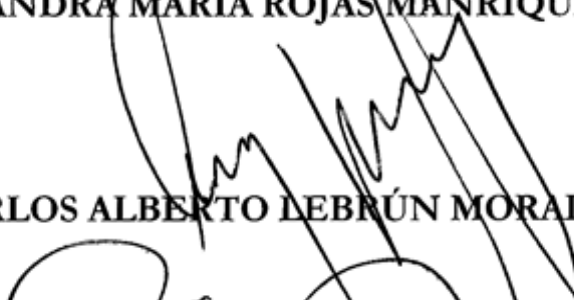
2.- Sin costas en esta instancia.


3.- Se ordena la devolución del expediente digital, con las actuaciones cumplidas en esta instancia, al Juzgado de origen.

El fallo anterior será notificado a las partes por Edicto de conformidad con el numeral 3° literal d) del artículo 41 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social y el auto AL 2550 del 23 de junio de 2021, proferido por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Los Magistrados,


SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE


CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES


VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO